



**"Al servicio de la justicia
y de la paz social"**
MAGISTRADA: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA

A -201

Proceso: Interrogatorio extraproceso

Solicitante: Jaime Antonio Escobar Álvarez

Citada: Luz María Merino Navia

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 001 2021 00319 02

Procedencia: Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín

Asunto: Revoca decisión apelada

Medellín, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Procede la suscrita magistrada a resolver el recurso de apelación que, en subsidio al de reposición, interpuso el apoderado judicial de la convocada Luz María Merino Navia contra el auto proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín el 29 de agosto de 2022, asignado por reparto a este despacho el 16 de noviembre pasado.

ANTECEDENTES

El abogado Jaime Antonio Escobar Álvarez, actuando en causa propia, solicitó la práctica de interrogatorio extraproceso a la señora Luz María Merino Navia, con el objeto de acreditar los servicios profesionales que prestó a aquella.

La solicitud correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, quien, mediante auto del 4 de noviembre de 2021, admitió la misma y programó audiencia para el 18 de enero de 2022. La parte interesada allegó prueba de haber remitido a la señora Merino Navia, vía correo electrónico, comunicación para informarle sobre el contenido de la providencia aludida.

El día programado para la audiencia de interrogatorio extraproceso, no se hizo presente la señora Luz María Merino Navia, pero dentro del término de que disponía para justificar su inasistencia, solicitó fijar nueva fecha para absolver el interrogatorio, toda vez que, afirmó, debido a las dificultades que ha tenido con el abogado Escobar Álvarez tiene bloqueado los mensajes de correo electrónico que recibe de parte de aquel, por lo que solo se enteró de la audiencia al revisar la «*bandeja del Spam*» y encontrar allí el link de acceso a la audiencia que le fue remitido por el juzgado. No obstante, el juzgado decidió no aceptar la excusa presentada y declaró como ciertos cada uno de los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versan las 15 preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito allegado por el peticionario. Contra dicho proveído la apoderada judicial de la convocada formuló los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, el primero de ellos desestimado por el señor juez *a quo*, y el segundo se consideró inadmisibile por este Tribunal.

Posteriormente, la mandataria de la señora Merino Navia presentó solicitud de nulidad procesal, afincada en que el auto admisorio del trámite no se le notificó en debida forma a su representada, en tanto que el promotor de este asunto no cumplió con la carga de remitir, simultáneamente con la radicación de la petición de la prueba extraprocesal, copia a la parte convocada, así como tampoco le notificó de la providencia que la había admitido. Agregó que en el expediente no obra constancia de que la absolvente haya recibido en su correo electrónico el mensaje que presuntamente le fue dirigido por el petente, además, que debe tenerse en cuenta que desde el año 2021 ésta bloqueó la recepción de mensajes de datos que provengan del solicitante, tal como se puede corroborar en la copia de la demanda que obra en el expediente del proceso ordinario laboral rad. 050013105021 2021 00465 00, en la que adujo el hoy interesado que nunca pudo volver a cruzar palabra con la citada, «*ni por correo electrónico (no contestaba a mis escritos), ni por WhatsApp (idéntica respuesta), ni a llamadas telefónicas a sus números privado y celular (no contestaba)*»

Surtido el traslado de la nulidad invocada, el abogado Escobar Álvarez se opuso a la prosperidad de la misma y sostuvo que en el expediente reposa prueba de la debida notificación de la incidentista, así como del mensaje que recibió por parte del juzgado con relación al link de acceso a la audiencia virtual. Indicó que los argumentos de la nulidad adolecen de respaldo probatorio y están basados en simples afirmaciones.

El juzgado, en auto del 29 de agosto de 2022, consideró que si bien pudo haberse configurado alguna causal de nulidad, lo cierto es que para el caso y conforme lo tiene establecido el artículo 136 del CGP, la nulidad se entiende saneada porque la citada actuó sin proponerla, al impugnar el auto que no aceptó la justificación de inasistencia a la audiencia y que a su vez la declaró confesa. Por consiguiente, negó la solicitud de nulidad.

DE LA IMPUGNACIÓN

La mandataria judicial de la señora Merino Navia presentó los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, aduciendo, como hechos configuradores de la nulidad, que el juzgado al considerarla saneada está desatendiendo el derecho constitucional de defensa de la incidentista, a la vez que el artículo 137 del CGP, que ordena poner en conocimiento las nulidades que no hayan sido saneadas. Igualmente que el juzgado no verificó el cumplimiento del Decreto 806 de 2020, en tanto que el convocante no allegó prueba de que el correo remitido a la convocada, para notificarla de la presente actuación, haya sido recibido por aquella.

Como resultas del recurso horizontal el juzgado de origen mantuvo la decisión censurada y concedió el recurso de apelación, apoyado en que la solicitante de nulidad *«habiendo comparecido o actuado en estas diligencias... primero en forma directa y sin apoderado judicial, lo hizo en primer lugar para pretender justificar su no asistencia a la audiencia de interrogatorio de parte...(cuyo auto de citación le fue notificado por el peticionario por correo electrónico, y para lo cual el Juzgado le remitió al mismo e-mail, que está acreditado es el que usa la Sra. Merino, pues del mismo provino su escrito de excusa, el link o vínculo de conexión a la plataforma CSJ.LIFE*

SIZE... más no para pedir la declaratoria de nulidad de lo actuado; y luego nuevamente actuó la misma Sra. Merino y ya con la asesoría profesional de la abogada que designó como su apoderada... pero tampoco lo hizo para pedir nulidad alguna, sino para formular los recursos de reposición y de apelación frente al auto que le negó acceder a la justificación de inasistencia y que la declaró confesa de los hechos susceptibles de confesión contenidos en el interrogatorio...»

En los términos del artículo 326 CGP, el profesional del derecho Escobar Álvarez adujo que la nulidad pretendida debe negarse, ya que la señora Merino Navía fue citada por intermedio de su correo electrónico, respetandosele sus garantías procesales.

Para resolver se exponen las siguientes

CONSIDERACIONES

Particular importancia reviste la vinculación de quienes son demandados o citados a un trámite en que la ley exija su notificación personal, de ahí se explica que el legislador al regular el tema de la notificación del auto admisorio de la demanda, el mandamiento ejecutivo o la práctica de una prueba extraprocesal, según el caso, haya instituido que deba hacerse de forma personal, para lo que es menester seguir una serie de formalidades que inexorablemente deben acatarse, en tanto fueron instituidas como exigencias perfiladas a garantizar el debido proceso y cuya omisión se consagra como motivo de nulidad procesal en el numeral 8° del artículo 133 del CGP. La preponderancia de la debida notificación radica en que, como la ha enseñado la Corte Constitucional, **«la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual**

manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales¹.»

En armonía con lo anterior, es preciso relieves que la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, ha permitido que la notificación de la providencia inaugural del proceso o trámite especial que deba hacerse de forma personal, *también* pueda realizarse a través de mensaje de datos. Así pues, corresponde verificar las reglas instituidas en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, vigente para el momento en que se agotó el trámite hoy cuestionado, a cuyo tenor literal:

Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación (De conformidad con la sentencia C 420 de 2020, entiéndase que el término referido comenzará a correr cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda establecer por otro medio el acceso del destinatario al mensaje).

Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso (...).

¹ Cfr. Corte Constitucional, sentencia C 670 de 2004 citada en T-025 de 2018.

(negrita y subraya fuera de texto)

El apartado normativo trasunto denota, claramente, que el promotor de la demanda o trámite está habilitado para notificar personalmente a su contraparte mediante mensaje de datos o valiéndose del envío de la comunicación descrita por el artículo 291 del CGP. Por consiguiente, si se acude a la notificación personal de una providencia judicial por medios electrónicos, esta será viable y correlativamente efectiva siempre que se observen los siguientes supuestos: **1.** Se deberá afirmar bajo la gravedad de juramento que el correo electrónico suministrado es el utilizado por la persona a notificar; explicar cómo se obtuvo esa información y aportar prueba siquiera sumaria que demuestre que la dirección electrónica corresponde a la persona a notificar. **2.** En el mensaje deberá remitirse copia de la providencia a notificar, así como los anexos a que haya lugar. **3.** La notificación se entenderá surtida dos (2) días hábiles siguientes al acuse de recibido por parte del destinatario o desde que se pueda establecer por cualquier medio que accedió al mensaje.

Vistos los lineamientos brevemente esbozados, no concita duda que las diligencias encaminadas a la notificación de la parte citada, que avaló el juzgado originario, lucen abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico y constitutivas de nulidad procesal que no puede tenerse como saneada, por lo siguiente:

El abogado Jaime Antonio Escobar Álvarez solicitó el interrogatorio extraproceso de la señora Luz María Merino Navia y, en lo que atañe a la información para notificarla, expresó que ella *«se ubica en la Carrera 86 No. 35-B-20, Torre 2, Apartamento 1006, del Unidad Residencial Villa Libertadores, Barrio Simón Bolívar, de Medellín, Teléfono Fijo 5894733, Celulares 3206681919 o 3104541744, Correo Electrónico vidaytrascendencia@gmail.com. La información de la absorbente, la recibí, de la misma persona.»* (sic).

El juzgado admitió la práctica de la prueba y fijó el 18 de enero de 2022 para la realización de la audiencia. En consecuencia, el interesado remitió el 11 de noviembre de 2021, desde su correo electrónico, ca.urano6305@gmail.com, al descrito como perteneciente a la señora Merino Navia, vidaytrascendencia@gmail.com, con copia al juzgado, el siguiente mensaje: *«Adjunto le estoy enviado, adjunto, nota citación para que comparezca citación para que comparezca, dentro de los siguientes cinco días hábiles, luego de recibir el presente correo, para que comparezca ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, con el ánimo de notificarle del Proceso de la Referencia y, además, informarle que deberá comparecer, por vídeo conferencia a la Audiencia indicada en el Auto que se adjunta.»* (sic). El 15 de enero de 2022, el juzgado envió a los correos electrónicos de las partes el link de acceso a la audiencia y el 18 de los mismos mes y año la llevó a cabo.

De lo actuado se infiere que el solicitante no acató íntegramente los requisitos que dispone el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, en tanto que omitió afirmar bajo la gravedad de juramento que el correo electrónico vidaytrascendencia@gmail.com correspondía a la señora Merino Navia y adjuntar las pruebas sumarias que así lo corroborasen.

Asimismo, no es posible establecer que el correo electrónico remitido a la convocada para notificarla del auto que admitió su interrogatorio extraproceso, haya sido conocido por la misma, como quiera que en el expediente no milita prueba de que hubiera acusado su recibo o de que por otro medio haya tenido acceso al mensaje. Basta con examinar el archivo 10 del expediente para constatar que solo se aportó la constancia de envió, **no de entrega o recibido**, de dicho email. Por manera que no es dable reputar colmados los supuestos contenidos en el inciso tercero del artículo 8 del Decreto 806 de 2020², en tanto que, según lo dilucidado por la Corte Constitucional en sentencia C420 de 2020, **la notificación personal** solo se entenderá surtida pasados dos (2) días hábiles siguientes a cuando «el

² Cfr. «La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.»

iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje».

A lo anterior se aúna que el juzgado soslayó dar cumplimiento al artículo 132 del CGP, atinente a que una vez agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear las nulidades u otras irregularidades del proceso. Y así resulta ser porque de otra manera no sería entendible que decida continuar con el procedimiento inadvirtiéndolo aspectos básicos, pero de notoria importancia, para garantizar los derechos de la parte llamada a absolver el interrogatorio, dado que una vez el solicitante de la prueba adjuntó la constancia de notificación dirigida a la citada, el juzgado no dio cuenta de haber examinado el contenido de la misma y verificar la correcta notificación del auto que admitió la petición probatoria.

Para este Tribunal los desafueros expuestos edifican la nulidad de que trata el numeral 8 del artículo 133 del CGP, en tanto que no se practicó en legal forma la notificación de un auto que, conforme al artículo 183 *ibídem*, debía ser notificado personalmente a la señora Luz María Merino Navia.

Ahora, a diferencia de lo estimado por el juez *a quo*, dicha nulidad no puede entenderse saneada siguiendo la norma descrita por el No. 1 del artículo 136 del CGP, según la cual la nulidad se sana si la parte que podía alegarla no lo hizo o actuó sin proponerla, en tanto que, no obstante la llamada a absolver el interrogatorio haya presentado excusa para justificar su no comparecencia a la audiencia e impugnado la decisión de no aceptarle la misma y declararla confesa, lo cierto es que dichas intervenciones, pese a no haber sido calificadas bajo el epíteto de nulidad procesal, si contienen, en esencia, los reparos que hoy mediante nulidad se ventilan. Puntualmente, refirió la incidentista en su primera intervención el 20 de enero de 2022:

«El día martes al regresar de mi periodo de descanso, me dispuse a eso de las 2:00pm, a examinar mi correo electrónico personal vidaytrascendencia@gmail.com, ya que en la semana anterior no había tenido

*acceso al internet, al revisarlo encontré en la bandeja del Spam un link de su despacho en el cual me invitaba a conectarme a las 9:00 a.m., para una audiencia, desafortunadamente el correo lo abrí después del mediodía de ese 18 de enero, por lo que no pude presentarme ante Usted. No tenía conocimiento de que este Despacho me solicitara para un asunto en específico, **nunca fui notificada de ello, pues las relaciones con el solicitante me llevaron a bloquear en el año 2021 y hasta el mes de diciembre su email**, abría agradecido que el abogado Escobar Álvarez me hubiera notificado o puesto sobre aviso por otros medios lo relativo a esta audiencia, porque él tenía conocimiento de que le tenía bloqueado el correo por razones que nos son del caso comentar aquí sino es necesario. Estoy sorprendida de que en el correo que su Despacho me envió el pasado sábado 15 de enero en horas de la tarde, para informarme de la audiencia, aparece un archivo del peticionario de la prueba **sin que tenga constancia del recibido y es más NUNCA LA RECIBI.**»*

Y el 29 de marzo de 2022, por intermedio de recurso de reposición y, en subsidio, apelación, dijo: «se observa que el Despacho se limitó a integrar al expediente las diligencias de notificación electrónica realizadas por el convocante a la absolvente, apporto prueba del envío, eso se evidenció, **sin embargo, del envío del correo electrónico no se vislumbra la constancia de recibido del mensaje de datos o cualquier otro documento que permitiera constatar el acceso positivo del destinatario**, conforme lo estableció la de la sentencia C-420 de 2020 de la Corte Constitucional, que Declaró EXEQUIBLE de manera condicionada el inciso 3º del artículo 8 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto Legislativo 806 de 2020, por lo que **el Despacho debió REQUERIR al peticionario para que allegare el acuse de recibo o certificara el acceso de mi representada a la notificación electrónica enviada; ello a través del mismo sistema de confirmación electrónica que utilizó, solo así, se hubiere constatado que el mensaje enviado aparecería como leído o no, esta judicatura solo se limitó a convalidar el hecho y simplemente fijó fecha y hora para audiencia para recibir el interrogatorio, sin intentarse una nueva notificación.**»

En tal sentido, aceptar que la nulidad quedó saneada cuando la citada ha alegado desde la fase inicial de este procedimiento no haber sido notificada debida forma, equivaldría a una aplicación meramente mecánica y formal de las normas de procedimiento, olvidando que el juez obvió el control de legalidad a que estaba compelido, de conformidad con el artículo 132 del CGP, quien, como se expuso, no realizó ningún análisis al trámite de notificación que aquí se surtió. Del mismo se traduciría en un abierto desvío a las reglas de interpretación prescritas por el artículo 11 del mismo Estatuto Procesal Civil, a cuyo contenido: *«Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.»*

Así las cosas, se revocará la providencia de primera instancia para en su lugar declarar la nulidad de lo actuado en este trámite, con posterioridad al auto que admitió la práctica de interrogatorio extraproceso, dictado el 4 de noviembre de 2021, precisando que la señora Luz María Merino Navia se entenderá notificada por conducta concluyente de dicha providencia desde el día en que alegó la nulidad, que lo hizo en su primera intervención en este trámite, que data del 20 de enero de 2022, y como quiera que para esta fecha ya había pasado la de la audiencia señalada en el mismo auto admisorio de la prueba extraprocesal, deberá el juzgado señalar nueva fecha para llevar a cabo el interrogatorio.

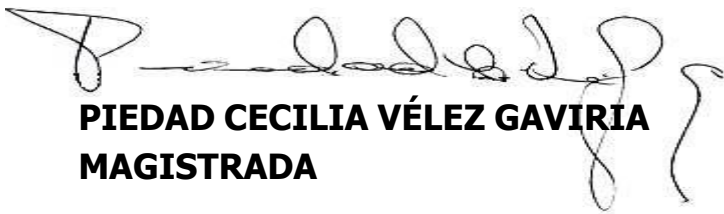
Colofón de lo expuesto y sin necesidad de ahondar en más consideraciones la suscrita magistrada

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR el auto de fecha y procedencia indicadas, para en su lugar **DECLARAR LA NULIDAD** de lo actuado en este proceso, con posterioridad al auto admisorio de la prueba extraprocésal de interrogatorio de parte, al estructurarse la nulidad consagrada en el numeral 8° del artículo 133 del CGP.

SEGUNDO. TENER NOTIFICADA POR CONDUCTA CONCLUYENTE a la señora Luz María Merino Navia del auto admisorio de la prueba extraprocésal de interrogatorio de parte, desde el día 20 de enero de 2022, y como quiera que para esta fecha ya había pasado la de la audiencia señalada en el citado auto admisorio, deberá el juzgado señalar nueva fecha para llevar a cabo el interrogatorio.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
MAGISTRADA

Firmado Por:
Piedad Cecilia Velez Gaviria
Magistrada
Sala 002 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 570051f05534028c371bdf708bc11e2d3ce0945a62a73c9a7d16e1cd3bcfa97c
Documento generado en 19/12/2022 04:59:22 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>